



JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD

Medellín, cinco (5) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	05001 40 03 013 2021 00426 00
Procedimiento:	Acción de tutela
Accionante:	Mauricio Garcés Palacio
Accionado:	Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Marinilla
Tema:	Derecho de petición
Sentencia:	General N° 103 Especial 099
Decisión:	Niega derecho de petición por hecho superado

Procede a resolver la acción de tutela del trámite de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Expresó el accionante que desde el año 2019, actúa como apoderado judicial, dentro de un proceso ejecutivo hipotecario que se adelanta en el Juzgado 4 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín. Mediante auto del 15 de noviembre de 2019, el mencionado Despacho profirió auto ordenando librar mandamiento de pago y ordenó el embargo y secuestro del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria N.º 018-24173, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Marinilla. La medida de embargo le fue comunicada a la entidad por medio del oficio N.º 2426 del 15 de noviembre de 2019.

Relató que, el día 16 de diciembre de 2019, la Oficina de Instrumentos Públicos de Marinilla, emitió las facturas por los gastos de registro del oficio N.º 2426 y realizó la inscripción del embargo, no obstante, en la anotación N.º 18 del certificado de libertad, se registró el embargo a nombre del Juzgado 12 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín y no del Juzgado 4

Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, quien fue el que dio la orden del embargo.

Conforme a ello, el Juzgado 4 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, mediante comunicación del 10 de septiembre de 2020, le informó a la Oficina de Instrumentos Públicos de Marinilla, sobre el error cometido, sin embargo, la misma hizo caso omiso y no corrigió la imprecisión. Posteriormente, el día 11 de marzo de 2021, el accionante elevó un derecho de petición frente a la entidad demandada, solicitando la corrección de la anotación N.º 18 del certificado de libertad del folio de matrícula inmobiliaria N.º 018-24173 y se indicara que la medida de embargo del bien inmueble le había sido ordenado por parte del Juzgado 4 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín y no del Juzgado 12 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, pero a la fecha no había recibido respuesta alguna a lo solicitado.

En ese sentido, el actor consideró, que se le está vulnerando su derecho fundamental de petición y en consecuencia, solicitó se ordenara a la accionada se pronunciara respecto de la petición presentada el 11 de marzo de 2021.

1.2. La presente acción de tutela fue admitida el 23 de abril de 2021, se ordenó vincular por pasiva al Juzgado 4 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín. La accionada y la vinculada fueron debidamente notificadas, vía correo electrónico.

1.3. La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Marinilla, a través del Registrador manifestó que, le dieron respuesta a la solicitud del accionante y le informaron que ya habían realizado la corrección de la anotación, petitionada mediante oficio. Por lo tanto, solicitaron se declarara la improcedencia de la acción de tutela, por hecho superado.

El Juzgado 4 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, allegó contestación al requerimiento hecho por el Despacho, en la que indicó que habían dado el trámite adecuado al proceso ejecutivo hipotecario de radicado 05001310300420190046800, a favor de José Ignacio Posada González y María Eugenia Duque Duque y en contra Emilia Martínez Correa

y Valeria Martínez Correa. Libraron mandamiento de ejecutivo mediante auto del 9 de diciembre de 2019 y decretaron el embargo del bien inmueble identificado con M.I. 018- 24173, el cual, se notificó mediante oficio No 2426 a la Oficina de Registro Públicos de Marinilla.

Ante el error detectado en la medida ordenada, mediante el oficio No 413, le solicitaron a la Oficina de Instrumentos Públicos de Marinilla, la corrección de la anotación N°18 del folio de matrícula inmobiliaria, en el sentido que el embargo en el proceso ejecutivo hipotecario fue comunicado por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Oralidad de Medellín y no por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Oralidad de Medellín.

Precisaron que, el día 26 de abril 2021, les llegó al correo institucional un comunicado por parte de la Oficina de Registro Públicos de Marinilla, informando que había realizado la corrección de la anotación y enviaron copia del certificado de tradición y libertad que solo sirve para consulta y en el que se puede apreciar la corrección advertida

II. COMPETENCIA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y el Decreto 2591 de 1991, artículo 32, es competente este Despacho para conocer y decidir respecto de la solicitud de tutela impetrada.

III. PROBLEMA JURÍDICO.

De acuerdo con la situación fáctica puesta de presente en el asunto bajo estudio, se debe determinar si la accionada, le está vulnerando el derecho fundamental al solicitante, al no darle una respuesta clara, de fondo y completa a la petición presentada el 11 de marzo de 2021

IV. CONSIDERACIONES

4.1. DE LA ACCIÓN DE TUTELA La acción de tutela de linaje constitucional, está instituida única y exclusivamente para la protección de

los Derechos Constitucionales Fundamentales de todas las personas del Estado cuando éstos resulten vulnerados por la acción u omisión de una autoridad que los desconozca.

4.2 DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA (ACTIVA - PASIVA) EN LA ACCIÓN DE TUTELA. De conformidad con el artículo 86 de la constitución política “Toda Persona” puede recurrir a la acción de tutela “para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, **por sí mismo o por quien actúe a su nombre**, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.

Conforme lo anterior, la acción de tutela puede ser ejercida por toda persona que considere que le están vulnerando sus derechos constitucionales fundamentales sea nacional o extranjera, natural o jurídica, ciudadano o no, que se halle en el territorio colombiano o se encuentre por fuera y la autoridad o particular que vulneró los derechos fundamentales se encuentre en Colombia. Así pues, puede ser ejercida directamente o por quien actúe a su nombre, bien sea por medio de (i) un representante legal en el caso de los menores de edad, las personas jurídicas, los incapaces absolutos y los interdictos; (ii) mediante apoderado judicial; y (iii) por agencia oficiosa. En estos tres últimos casos se debe probar la legitimación en la causa por activa.

Como ya se expresó, por mandato constitucional se faculta a todo ciudadano para que en su propio nombre instaure acción de tutela ante una autoridad judicial con el fin de hacer valer sus derechos fundamentales cuando los considere vulnerados o amenazados; dentro del presente caso, el señor **Mauricio Garcés Palacio**, actúa en causa propia por lo que se encuentra legitimado en la causa por **activa**.

Se tiene además la legitimación en la causa por **pasiva** de la accionada y la vinculada, toda vez que son a las que se les endilgan la “presunta” vulneración de los derechos fundamentales esgrimidos por la parte accionante.

4.3. SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. Este derecho fundamental se relaciona con la garantía de toda persona para presentar peticiones a las autoridades o a organizaciones privadas y obtener pronta resolución por parte de éstas. Su regulación se encuentra en la Ley 1755 del 2015.

Como derecho fundamental, éste no se agota en el simple acto de recibir una solicitud. Para dar cumplimiento al mandato constitucional, esta solicitud debe ser resuelta de una manera pertinente a lo que requiere el actor. Como bien lo ha expresado nuestro Tribunal Constitucional: *“El derecho de petición comprende no sólo la manifestación de la administración sobre el objeto de la solicitud, sino también el hecho de que dicha manifestación constituya una solución pronta para el caso planteado. Asimismo, el derecho referido exige por parte del ente o persona a quien es dirigida la petición el cumplimiento de ciertas obligaciones: en primer lugar, la respuesta debe ser adecuada a la solicitud planteada y en los términos de la misma. En segundo lugar, la respuesta debe ser eficiente para la solución de lo peticionado. En este punto se precisa que el funcionario no sólo debe responder, sino que también debe esclarecer, dentro del alcance de sus medios, el sendero jurídico necesario para lograr la solución del problema. Y, en tercer lugar, la comunicación debe ser oportuna¹”*.

La Corte Constitucional en sentencia T-558 de 2012 señaló lo siguiente: *“(...) el derecho de petición no sólo implica la posibilidad de presentar solicitudes a las autoridades estatales o a entes particulares, cuando la ley lo permita, sino, de igual manera, que se dé una oportuna respuesta con sujeción a los requerimientos establecidos en la ley para dicha petición. Es decir, independientemente de que lo resuelto por la entidad sea adverso o no a los intereses del peticionario, la resolución del asunto debe contar con un estudio minucioso de lo pretendido, argumentos claros, que sea coherente, dé solución a lo que se plantea de manera precisa, suficiente, efectiva y sin evasivas de ninguna clase. (...) una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario;*

¹ Corte Constitucional, Sentencia T-220 de 1994. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

es *efectiva* si la respuesta soluciona el caso que se plantea (artículos 2, 86 y 209 de la C.P.); y es *congruente* si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución a lo pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta. Bajo ese entendido, para que la respuesta a la petición se encuentre ajustada a la ley y a lo que la jurisprudencia constitucional ha manifestado al respecto, la misma, además de ser oportuna y de fondo como ya se mencionó, debe ser comunicada al peticionario. (...) En ese sentido, la respuesta que se le otorgue a las solicitudes realizadas en virtud de los anotados derechos, debe ir acorde con los principios antes mencionados. Así las cosas, bajo ese punto de vista no es de recibo exigir a la persona trámites innecesarios o engorrosos, que imponen una carga desproporcionada que no tiene por qué soportar y que se pueden convertir en un obstáculo para la materialización de sus derechos, más aún, cuando la entidad está en la capacidad de evitar tales inconvenientes, para que el peticionario pueda satisfacer de manera idónea sus pretensiones y no verse afectado en sus derechos”.

En **Sentencia C-007 de 2017**, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, la Corte Constitucional recordó el alcance del derecho de petición, atendiendo la consagración expresa en la Constitución (art.23), precisando:

“Según abundante jurisprudencia de este Tribunal, el derecho de petición es fundamental y tiene aplicación inmediata, sus titulares pueden ser personas mayores o menores de edad, nacionales o extranjeros, y a través de éste se puede acudir ante las autoridades públicas o ante particulares. Así mismo, el derecho de petición tiene un carácter instrumental en tanto **a través de éste se busca garantizar la efectividad de otros derechos constitucionales**, como los de información, participación política, libertad de expresión, salud y seguridad social, entre otros.

15. Así mismo, la Corte ha señalado que su **núcleo esencial** reside en una resolución pronta y oportuna de la cuestión que se pide, una respuesta de fondo y su notificación, lo anterior no necesariamente implica una respuesta afirmativa a la solicitud. Así pues, se entiende que este derecho está protegido

y garantizado cuando se obtiene una contestación oportuna, de fondo, clara, precisa, congruente y la misma es puesta en conocimiento del peticionario. El incumplimiento de cualquiera de estas características envuelve su vulneración por parte de la autoridad o del particular.

(...)En concordancia con lo expuesto hasta el momento, “puede afirmarse que el ejercicio del derecho de petición no exige formalidades más allá de las que establecen la Constitución Política y la Ley”, y está regulado por unas reglas previstas en el ordenamiento jurídico, las cuales pueden sintetizarse así:

*“a) El derecho de petición es determinante para la **efectividad de los mecanismos de la democracia participativa**. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.*

*b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la **resolución pronta y oportuna** de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.*

*c) La respuesta a las peticiones debe cumplir con los requisitos de: 1. **oportunidad**, 2. resolverse de fondo con **claridad, precisión y congruencia** con lo solicitado y 3. Ser puesta en **conocimiento** del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos, se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.*

d) La respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.

*f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula **ante particulares**, es necesario separar tres situaciones: 1. cuando el particular presta un **servicio público** o cuando realiza **funciones de autoridad**, el derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la Administración.*

2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente.”.

Igualmente, la sentencia T 058 de 2018, reiteró:

“Ahora bien, la obligación de resolver de fondo una solicitud no significa que la respuesta sea aquiescente con lo solicitado, sino el respeto por el ejercicio del derecho fundamental de petición, es decir, se debe emitir una respuesta clara, precisa, congruente, de fondo, sin que ello signifique necesariamente acceder a lo pretendido[35]. Debe recordarse que es diferente el derecho de petición al derecho a lo pedido: “el derecho de petición se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta. No se decide propiamente sobre él [materia de la petición], en cambio si se decide por ejemplo sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo invocado (...)”[36]. Es decir, la entidad o particular al que se dirija la solicitud está en la obligación de resolver de fondo la solicitud, lo que no significa que deba acceder necesariamente a las pretensiones que se le realicen”.

En conclusión, el derecho de petición no se agota en el simple acto de recibir una solicitud; para dar cumplimiento al mandato constitucional, esta solicitud debe ser resuelta de una manera pertinente a lo que requiere el actor

4.4 CONFIGURACION DE CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO. La Honorable Corte Constitucional en sentencia T- 013 de 2017, MP. ALBERTO ROJAS RIOS, precisó sobre el particular:

“(…) No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto a que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces

inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción.”

En este sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que la acción de tutela, en principio, “pierde su razón de ser cuando durante el trámite del proceso, la situación que genera la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados es superada o finalmente produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo”. En estos supuestos, la tutela no es un mecanismo judicial adecuado pues ante la ausencia de supuestos fácticos, la decisión que pudiese tomar el juez en el caso concreto para resolver la pretensión se convertiría en ineficaz.

En ese orden, si la acción de tutela busca es ordenar a una autoridad pública o un particular que actúe o deje de hacerlo, y “previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales”. En otras palabras, ya no existirían circunstancias reales que materialicen la decisión del juez de tutela.

En cuanto al hecho superado, esta Corporación ha considerado que esa situación “no conduce a declarar la improcedencia de la acción, pues la Corte Constitucional puede estudiar el fondo del asunto para evaluar si hubo vulneración de las garantías superiores, en virtud de la función de pedagogía constitucional que también realiza a través de los fallos de tutela.

Si bien, en estos eventos no se emiten ordenes ante la ineficiencia de las mismas, si la decisión proferida por el juez de tutela contraría los postulados constitucionales, la Corte debe revocarla”.

(...)

En Sentencia T- 512 de 2015, la Sala Primera de Revisión estableció que:

“9. Cuando la presunta vulneración o riesgo fue superado con la satisfacción o salvaguarda de las garantías invocadas, se presenta una carencia de objeto por hecho superado.

10. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que, ante un hecho superado, no es perentorio para los jueces de instancia, pero sí para la Corte Constitucional en sede de revisión, determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección fue solicitada y el tipo de vulneración al que fueron expuestos.

Esto, sobre todo, cuando considera que la decisión debe incluir observaciones sobre los hechos del caso, por ejemplo, llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición. En todo caso, el juez de tutela, independientemente de la instancia en la que conozca de la acción, debe demostrar que existió un hecho superado antes del momento del fallo.

(...)

En conclusión, la carencia actual de objeto se presenta durante el trámite del proceso por hecho superado cuando la situación que genera la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados se supera, en estos casos no es necesario el pronunciamiento de fondo por parte del juez, salvo que se requiera precisar al agente transgresor que su acción u omisión fue contraria a los derechos constitucionales.”

4.5 CASO CONCRETO. En la solicitud de amparo constitucional, el accionante **Mauricio Garcés Palacio**, le solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Marinilla- Ant., una respuesta clara y de fondo respecto a la petición elevada el 11 de marzo de 2021, mediante la cual solicitaba la corrección de la anotación N.º 18 del Folio de Matrícula Inmobiliaria N.º 018-24173. Como prueba de ello, aportó junto con la solicitud de amparo, copia de la solicitud.

Por su parte, **la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Marinilla**, a través de su Registrador manifestó que ya le habían dado respuesta a la solicitud del accionante, mediante la cual le informaron que ya habían realizado la corrección de la anotación petitionada mediante oficio. Por lo tanto, solicitaron se declarara la improcedencia de la acción de tutela, por hecho superado.

El **Juzgado 4 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín**, indicó que había dado el trámite adecuado al proceso ejecutivo hipotecario de radicado 05001310300420190046800 y que ante el error detectado en la medida ordenada, le solicitaron a la Oficina de Instrumentos Públicos de Marinilla, mediante el oficio 413, la corrección de la anotación N°18 del folio de matrícula inmobiliaria 018- 24173, en el sentido de aclarar que el Juzgado que había dado la orden de embargo era el 4 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín y no el Juzgado 12 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín.

Asimismo, informaron que, el día 26 de abril 2021, llegó al correo institucional un comunicado por parte de la Oficina de Registro Públicos de Marinilla, mediante el cual les hacían saber que ya la entidad había realizado la corrección de la anotación y enviaron copia del certificado de tradición y libertad.

Ahora bien, Para emitir pronunciamiento frente al caso concreto y con relación al derecho de petición, es preciso advertir que en reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha manifestado que el núcleo esencial del mismo reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión solicitada. En ese sentido, la vulneración del derecho de petición se presenta por la negativa de un agente a emitir respuesta de fondo, clara, oportuna y en un tiempo razonable, y por no comunicar la respectiva decisión al petente.

Así las cosas, conforme la Jurisprudencia constitucional, la respuesta debe ser **clara, concreta, precisa, de fondo y congruente con lo solicitado**, además, puesta en conocimiento al peticionario **directamente**, pues la omisión de tal diligencia constituye una vulneración al derecho fundamental de petición por parte de la accionada, toda vez que si lo decidido no se da a conocer al interesado continúa latente la insatisfacción de tal garantía fundamental.

De este modo, si en el trámite preferente y sumario que corresponde a la acción de tutela se acredita, como aquí ocurrió, que el sujeto pasivo, cesó en su proceder lesivo del derecho fundamental del accionante, porque concretó la acción que indebidamente venía omitiendo, que para el caso fue

no dar respuesta a la petición incoada desde el 11 de marzo de 2021, el Juez de tutela no procederá a impartir esa orden.

Para el caso, se observa que la accionada, emitió la respuesta que consideró adecuada frente a la petición elevada por el actor y procedió a corregir la imprecisión de la anotación N.º 18 del folio de matrícula inmobiliaria 018-24173, tal y como se desprende del certificado de tradición y libertad del inmueble. Lo anterior, igualmente le fue notificado al actor al correo electrónico mgarces@khlegal.com.co, señalado en la acción de tutela.

Así las cosas, se advierte que se ha configurado un hecho superado, como consecuencia de la desaparición del hecho que amenazaba el derecho invocado, tal y como lo ha sostenido en reiteradas ocasiones la jurisprudencia constitucional, de modo que, si la situación de hecho de la cual esa persona se queja ya ha sido superada en términos tales que la aspiración primordial en que consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, puede entenderse que ha desaparecido la vulneración, la decisión que pueda emitir el juez de tutela no tendría ninguna resonancia frente a la posible acción u omisión de la accionada y en este caso, es claro que a la parte accionante se le resolvió por parte de la tutelada, el fundamento de su pretensión de tutela, observando este despacho que ha cesado la vulneración al derecho de petición alegado, sobreviniendo improcedente la acción.

Finalmente, se ordenará desvincular del presente trámite al **Juzgado 4 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín**, por cuanto no se vislumbra vulneración alguna de su parte.

V. DECISIÓN

Por lo anterior, en mérito de lo expuesto, la suscrita **Juez Trece Civil Municipal de Oralidad de Medellín**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por mandato de la Constitución Política,

FALLA

Primero: Negar el amparo constitucional deprecado para la protección del derecho fundamental de petición invocado por **Mauricio Garcés Palacio**, por parte de **la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Marinilla-Ant.**, dada la carencia actual de objeto, por hecho superado.

Segundo. Desvincular del presente trámite al Juzgado 4 Civil el Circuito de Oralidad de Medellín, por lo indicado en la parte motiva de esta sentencia.

Tercero: Si la presente providencia no es impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remítase inmediatamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE

PAULA ANDREA SIERRA CARO

JUEZ

2

Firmado Por:

PAULA ANDREA SIERRA CARO

JUEZ MUNICIPAL

JUZGADO 013 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

76c7e8a2c95487c769f1c756faeb7e51967f331539f8c3605fc12b9710a40433

Documento generado en 05/05/2021 11:43:39 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>